

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

CONSULTA - SENTENCIA	
DEMANDANTE	CRUZ MAGDALENA GUTIÉRREZ LOPERA
DEMANDADOS	COLPENSIONES y AFP COLFONDOS S.A.
RADICADO	05001-31-05-007-2018-00761-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Ineficacia del acto de traslado de régimen pensional
DECISIÓN	Confirma.

Medellín, cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido y aprobado en Sala virtual

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento de sentencia escrita, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora

CRUZ MAGDALENA GUTIÉRREZ LOPERA contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** y **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 029**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir el grado jurisdiccional de consulta a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, contra la sentencia que profirió el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 9 de agosto de 2019.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la demandante nació el 7 de enero de 1965, y estuvo afiliada al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, donde efectuó cotizaciones al régimen de prima media con prestación definida entre el 9 de marzo de 1990 y el 31 de enero de 1996, para un total de 293,86 semanas.

Que el día 7 de noviembre de 1995, suscribió un formulario de afiliación ante la AFP COLFONDOS S.A., y empezó a cotizar al régimen de ahorro individual con solidaridad a partir del mes de enero de 1996, cuando laboraba al servicio del empleador “CORPORACIÓN CLUB LOS ALMENDROS” donde devengaba 2 salarios mínimos legales mensuales para esa época, y cuenta en la actualidad con mas de 1.374,43 semanas cotizadas.

Afirma que al momento de trasladarse el fondo privado de pensiones, no se le suministro la información relevante en materia pensional, es decir, que su pensión dependería del capital de acumulado en la cuenta de ahorro individual, y que para poderse pensionar anticipadamente su IBC debería ser muy superior, tampoco se le advirtió sobre la posibilidad de retornar al régimen de prima media antes de faltarle 10 años para cumplir con la edad pensional, ni tampoco recibió una re asesoría pensional cuando se encuentra en ese limite de los 47 años de edad.

Se indica en el escrito introductorio que la AFP accionada el 21 de junio de 2018 realizó una proyección de la mesada pensional que le correspondería a la demandante a la edad de 57 años, cuyo resultado fue de \$0, a sabiendas que a esa misma edad la mesada pensional en Colpensiones sería de \$2.489.935.

Finalmente señala el libelo genitor, que la demandante solicitó su traslado al régimen de prima media con prestación definida, así como la anulación de la afiliación al RAIS, pero tales peticiones fueron negadas por la AFP COLFONDOS S.A., mediante comunicados del 9 de julio de 2018 y el 6 de agosto de 2018.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se declare la ineficacia y/o nulidad del traslado u afiliación de la actora al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la AFP COLFONDOS S.A. al haberse presentado un vicio en el consentimiento, y que en consecuencia, SE DECLARE que la señora CRUZ MAGDALENA GUTIÉRREZ LOPERA ha permanecido sin solución de continuidad en el régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, y que se ordene a la AFP COLFONDOS S.A. a trasladar a COLPENSIONES el saldo proveniente de la cuenta de ahorro individual de la demandante, con sus rendimientos y sin deducción alguna, y en el eventual caso de acreditarse los requisitos pensionales durante el trámite judicial, se CONDENE a COLPENSIOENS al reconocimiento y pago de la

pensión de vejez correspondiente, y finalmente solicita la condena ultra y extra petita, y que las costas del proceso queden a cargo de las codemandadas.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las accionadas a dar respuesta a la misma por intermedio de sus respectivos apoderados judiciales.

COLPENSIONES describió el traslado de esta acción (fls.81 al 91), y través del mismo, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de esta acción; aceptó la afiliación de la demandante al ISS y su posterior traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la AFP COLFONDOS S.A., sin constarle los restantes supuestos facticos, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA Y FALTA DE DERECHO PARA PEDIR; BUENA FE; PRESCRIPCIÓN Y/O CADUCIDAD DE LA ACCIÓN; IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS; y la INNOMINADA O GENÉRICA”*.

AFP COLFONDOS S.A., por su parte, allegó contestación a la demanda (fls.113 al 141), y a través de la misma, se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas; negó los hechos de la acción, salvo la afiliación, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA; NO EXISTE PRUEBA DE CAUSAL DE NULIDAD ALGUNA; PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA SOLICITAR LA NULIDAD DEL TRASLADO; BUENA FE; COMPENSACIÓN Y PAGO; SANEAMIENTO DE CUALQUIER PRESUNTA NULIDAD DE LA AFILIACIÓN; INNOMINADA O GENÉRICA; AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO; OBLIGACIÓN A CARGO EXCLUSIVAMENTE DE UN TERCERO; y NADIE PUEDE IR EN CONTRA DE SUS PROPIOS ACTOS”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 9 de agosto de 2019, la Juez de conocimiento accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado de la señora CRUZ MAGDALENA GUTIÉRREZ LOPERA del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, por falta de consentimiento informado.

También declaró que la afiliación de la demandante al régimen de prima media ha sido sin solución de continuidad, y condenó a COLFONDOS S.A. a trasladar a COLPENSIONES dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la totalidad de los aportes efectuados por la demandante, junto con los rendimientos que se hubieren causado, sin descontar ningún valor por concepto de cuotas de administración, aportes al fondo de solidaridad y/o primas de seguros previsionales.

Ordenó a COLPENSIONES a recibir dichos aportes, registrarlos como semanas cotizadas en la historia laboral de la demandante, absolviendo a dicha administradora pública de pensiones de las restantes pretensiones y cargos formulados en su contra, esto es, la pensión de vejez deprecada, al no acreditarse la edad mínima requerida para tal fin.

Finalmente impuso las costas del proceso en la primera instancia a cargo de la AFP COLFONDOS S.A. y a favor de la demandante, fijando como agencias en derecho la suma de \$1.656.232, equivalentes a 2 SMLMV.

Como fundamento de su decisión, estimó el juez de primer grado que el fondo privado incumplió su deber de información frente al afiliado, generándose así una ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad.

Consulta.

En atención a que la sentencia de primera instancia no fue recurrida en alzada por los apoderados judiciales de las partes, y que dicha sentencia contiene una condena en contra de la entidad pública demandada, se dispuso la remisión del proceso a este Tribunal de Distrito Judicial, para que se surta a su favor el grado jurisdiccional de consulta, tal como lo prevé el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, y la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia.

Alegatos de Conclusión:

La apoderada judicial de la AFP COLFONDOS S.A., Dra. DEIBY CANIZALES ERAZO, aprovechó la oportunidad procesal otorgada, para solicitar que no se ordene aplicar la indexación sobre los conceptos que serán objeto de devolución al régimen de prima media con prestación definida, dado que los rendimientos generados en la afp, son en todo caso superiores a los que hubiera podido generar el ISS o Colpensiones, si la actora nunca se hubiera trasladado de régimen, teniendo en cuenta que Colfondos es la AFP que genera el doble de la rentabilidad mínima exigida, quedó más que compensado este concepto, amén que no fue solicitado ni en la demanda, ni por Colpensiones, por tanto, una condena en ese sentido, trasgrediría el principio de consonancia y congruencia de la sentencia con las pretensiones de la demanda y comportaría violación del derecho de defensa y el debido proceso.

A su turno, la apoderada judicial de COLPENSIONES, Dra. ADRIANA VELOSA PEREZ portadora de la T.P. 264.806 del C.S. de la J., a quien se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario, hizo lo propio, y a través de los alegatos indicó que en el presente asunto debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: **1.** La inoponibilidad de la responsabilidad de la afp ante Colpensiones, en casos de ineficacia de traslado de régimen; **2.** La inversión de la carga dinámica de la

prueba; **3.** La ausencia del cumplimiento de las obligaciones legales del demandante según el decreto 2241 de 2010 y de las obligaciones reciprocas del contrato de afiliación; **4.** La devolución de la totalidad de los aportes debidamente indexados; y **5.** La improcedencia del reconocimiento de la pensión de vejez.

Y finalmente la apoderada judicial de la demandante, Dra. PAULA ANDREA ESCOBAR SÁNCHEZ, solicita la confirmación de la sentencia que se revisa en consulta, toda vez que la AFP privada, al momento de efectuar el traslado inicial de régimen pensional, no le brindó una asesoría clara, completa y eficiente a la actora, que le permitiera tomar una decisión consiente sobre las implicaciones que en su futuro pensional acarrearía dicho traslado, por lo cual, ante la falta de esa asesoría e información, no puede hablarse que el traslado de régimen pensional se dio de manera libre y voluntaria, así las cosas, al no ser libre y voluntaria la decisión por el desconocimiento de las consecuencias que este le ocasionaría, el mismo se torna ineficaz, tal y como lo indica el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 271 del mismo texto normativo, y para respaldar sus argumentaciones cita una sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VI. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.- La Ineficacia en el traslado de régimen pensional.-

El objeto central de esta Litis, teniendo en cuenta el grado jurisdiccional de consulta, la controversia en esta instancia se extiende a los aspectos de la sentencia que resultaron desfavorables para la administradora pública de pensiones codemandada, relacionados con la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional.

Partirá la Sala de establecer si el traslado del RPM al RAIS que realizó el demandante a través de la AFP COLFONDOS S.A. y de COLPENSIONES, alcanzó o no a producir los efectos jurídicos respectivos.

Sea lo primero referir que la libre escogencia de régimen pensional y el traslado que en tal virtud se efectúe, teniendo movilidad entre del régimen de prima media con prestación definida, al de ahorro individual con solidaridad, tiene como presupuesto esencial, el absoluto conocimiento del asegurado sobre las consecuencias jurídicas que se puedan derivar de dicho cambio.

Más que simplemente tratarse del paso de un régimen de reparto que constituye un fondo público común, a un régimen fundamentado en el ahorro del propio asegurado, el fondo privado que recibe a la persona trasladada, a través del agente adscrito a la administradora, debe garantizar al interesado una completa ilustración de las ventajas y desventajas que le representa en su caso concreto ese cambio. Y no se trata de una simple información o encuesta que se limite a indagar por los datos generales del afiliado, sino que debe corresponder a un examen real y profundo sobre todo su contexto laboral, familiar, económico e incluso social, de cara a la decisión que más convenga frente a los dos regímenes pensionales, en el marco del derecho a su libre elección.

De no realizarse esa antesala de asesoría, se afecta la eficacia y validez del acto de traslado, el cual será ineficaz, entendiéndose que el traslado nunca existió. Ello por cuanto, es de la propia esencia del acto de traslado, el

suministro cabal y absoluto de toda la información, incluyendo el asesoramiento sobre todas las implicaciones pensionales y consecuencias que para el caso concreto pueden darse, ya que se trata de una decisión relevante de la cual depende el futuro pensional del asegurado.

Esto lleva a la Sala a subrayar, que las obligaciones de asesoría no fueron creadas por el Legislador a través de recientes normas, sino que desde la propia concepción dualista de dos regímenes pensionales a través de la Ley 100 de 1993, se establecieron como de su propia esencia.

Así, la asesoría a cargo de la administradora, se erige en una obligación insoslayable, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de los efectos económicos que puede representar una decisión de tal naturaleza.

En términos generales, es preciso referir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y luego de haber empezado a desarrollar una línea jurisprudencial desde el año 2008 (Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008), que fue decantando su posición a través del desarrollo de instituciones como *“el buen consejo”*, *“la inversión de la carga de la prueba”*, además de avanzar en la consolidación del concepto propio de la seguridad social, al pasar de entender que, más que tratarse de una simple nulidad, lo que se presentaba con la ausencia de información, era la Ineficacia, como sanción propia del acto jurídico en estos temas (Sentencias SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017), concluyó en una pacificada jurisprudencia (**sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019**), que en la actualidad continúa manteniendo su mismo sentido (Sentencia SL 3199 de 2020 entre otras).

Esta línea jurisprudencial, parte de destacar, que el deber de información es ineludible; que existe y se hace exigible, desde la propia

creación de los regímenes pensionales que introdujo la Ley 100 de 1993, sin importar que, si bien se han promulgado normas más recientes en las que se ha desarrollado el tema (numeral 1º del Artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el Artículo 23 Ley 795 de 2003; Artículo 9 de la Ley 1328 de 2009 y Decreto 2555 de 2010), se trata de una obligación que deriva de la propia Ley 100 de 1993, que promulgó la existencia de los dos regímenes pensionales, y el derecho a la libre elección.

También ha quedado claro, que a nivel procesal, el tema se rige por condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Es preciso, asimismo, tener en cuenta, que para la Sala de Casación Laboral (SL 1688 de mayo de 2019), *“a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos”*.

Esta postura es consecuente con los postulados que rigen en materia social, conforme a los cuales en el juicio jurídico sobre los derechos de los trabajadores y los afiliados a la seguridad social, resulta más relevante la realidad que los formalismos; la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrado la formación del derecho a la pensión, y; el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos

jurídicos en el traslado de régimen pensional, es el primero, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que eventualmente exista movilidad entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

CASO CONCRETO

Sea lo primero reseñar, que, conforme a la prueba documental obrante en el plenario, se advierte que la señora CRUZ MAGDALENA GUTIÉRREZ LOPERA, se vinculó al régimen de prima media con prestación definida a través del entonces Instituto de los Seguros Sociales, desde el 9 de marzo de 1990, pasando posteriormente, partir de diciembre de 1995 a la AFP COLFONDOS S.A., en el marco del traslado de régimen pensional, donde permanece actualmente.

Revisadas en detalle las consideraciones de la A quo para arribar a la decisión de declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional de la actora, esta Sala encuentra que las mismas se encuentran ajustadas al sentido de la jurisprudencia nacional, y consultan las particularidades del caso, teniendo en cuenta que la AFP COLFONDOS S.A. no alcanzó a probar haber brindado asesoría con suficiencia a la demandante, en su proceso de traslado.

No puede pasarse por alto, que por el simple hecho que la actora haya suscrito un formulario de afiliación, ello equivalga a una completa asesoría conforme a las particularidades de su caso.

Para la época del traslado de la demandante (año 1995), tal y como se refirió en precedencia, es indudable que eran exigibles estas obligaciones de asesoría, evidenciándose que la línea jurisprudencial en que se apoyó la A quo, y que esta Sala comparte, resultan completamente aplicables, siendo preciso concluir que el acto de traslado del régimen de prima media con prestación definida, al régimen de ahorro individual, a través de la AFP COLFONDOS S.A., fue ineficaz, y no produjo los efectos jurídicos pertinentes.

Se trata de la configuración de una sanción de pleno derecho (ineficacia), que se atribuye a la falta de cumplimiento de las obligaciones profesionales de la administradora del régimen privado, al no haber suministrado la información y asesoría pertinentes, en la oportunidad procedente, y no en otra posterior.

Sumado a lo anterior, también debe tenerse en cuenta la ineficacia del acto jurídico de afiliación o traslado, ha sido el efecto jurídico acogido por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, para dirimir este tipo de controversias jurídicas, y por tanto era un deber del juez de primer grado, acoger el precedente jurisprudencial para resolver el presente asunto, dicha postura jurisprudencia se ve expuesta entre otras en la sentencias SL4360 de 2019, SL1688-2019, SL1689-2019 SL3464-2019, donde se adoctrino frente al tema lo siguiente:

“...esta Sala precisó que la sanción impuesta por el ordenamiento jurídico a la afiliación desinformada es la ineficacia en sentido estricto o exclusión de todo efecto al traslado. Por ello, el examen del acto de cambio de régimen pensional, por transgresión del deber de información, debe abordarse desde esta institución y no desde el régimen de las nulidades o inexistencia...”

Visto lo anterior, estima la Sala que, conforme a la línea jurisprudencial pacífica del órgano de cierre, las obligaciones de asesoría, información y buen consejo se deben valorar en términos de oportunidad, esto es, si resultaron ser suministradas en el momento determinante previo al traslado para que la decisión se hubiere tomado lo suficientemente informada y con el conocimiento de todas las implicaciones que se pudieren generar, y, en segundo lugar, es preciso destacar que la incertidumbre sobre el valor de los ingresos de los asegurados no puede ser un tema del cual dependa el mayor o menor grado de acompañamiento que se dé a este, ya que ese es simplemente uno de los aspectos a considerar, siendo preciso hacer una valoración integral de todo su contexto familiar, profesional, laboral y productivo para brindarle una asesoría completa, que fue lo que no ocurrió en el presente caso.

De otro lado, en cuanto a la orden de devolución de los aportes con sus respectivos rendimientos, sin descontar ningún valor por concepto de cuotas de administración, aportes al fondo de solidaridad y/o primas de seguros previsionales, estima la Sala que lo dispuesto en este sentido por la juez de primer grado, resulta consecuente con el criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien, entre otras, en sentencia del 29 de julio de 2020, SL 2877, Radicación 78.667, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, decantó que, *“la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida...”*.

En consecuencia, al ser evidente que el efecto de la ineficacia hace que las cosas retornen al estado en que se encontraban antes del traslado, y que estos descuentos se realizaron en ejecución de un contrato que no surtió efectos ni nació a la vida jurídica, esta sala mantendrá lo ordenado en este sentido.

A partir de las anteriores consideraciones, la sentencia de primera instancia **será CONFIRMADA**, entendiéndose para todos los efectos legales, que la señora CRUZ MAGDALENA GUTIÉRREZ LOPERA, siempre ha pertenecido como afiliado a Colpensiones, sin solución de continuidad.

Finalmente, respecto a la indexación reclamada en los alegatos de instancia por parte de COLPENSIONES, frente a los conceptos que deben ser trasladados al régimen de prima media con prestación definida, estima la Sala, que la misma resulta improcedente, por cuanto la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que es precisamente la finalidad de esta indexación, ya se encuentra conjurada con la condena a la devolución de los rendimientos financieros, pues con estos últimos, se asegura que el capital a trasladar corresponda a un valor real y actual, para no afectar la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, máxime que la referida indexación no fue solicitada en la demanda, ni tampoco hizo parte de la fijación del litigio.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión preferida, y que el proceso fue conocido en segunda instancia en virtud del grado jurisdiccional de consulta, no habrá lugar a imponer costas procesales en segunda instancia.

VII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la sentencia objeto de consulta de origen y fecha conocidos, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: SE ORDENA la notificación por estados de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 098 del 8 de junio de 2021.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>